LA CONVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: MECANISMOS REGIONALES DE PROTECCION

*Rhonda Copelon**

I. INTRODUCCION

Fue a la velocidad de la luz que la Convención pasó el trámite de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mucho más rápido que cualquier otra convención interamericana. Es increíble pensar que fue hace solamente tres años que nos reunimos para redactar el primer borrador de la Convención y también que la última versión de la convención se ha mantenido muy fuerte.

Este logro se debe, a la valiente determinación de las mujeres golpeadas y violadas, las sobrevivientes del incesto y del acoso sexual, de romper el silencio y acabar con el sentido de vergüenza que acompañaban la violencia de género. Se debe también al liderazgo valioso y al protagonismo infatigable de las mujeres de las ONGs, de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y de otras instancias gubernamentales de América Latina y del Caribe en contra de la violencia de género en la región y en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. El reconocimiento en 1993, por parte de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos y la necesidad de incorporar la realidad de mujeres en todos los ámbitos de derechos humanos fue un logro transformador¹. Todo eso ha empezado a cambiar las actitudes sobre la violencia de género y ha preparado el terreno para la Convención al mismo tiempo que la iniciativa de la Convención, planteada por la CIM nutrió los avances en el ámbito mundial.

Desde el sufrimiento impuesto por los dictadores del continente nació su protagonismo contra la violencia de género, no solamente como crimen contra las mujeres sino como violación de los derechos humanos universales. El protagonismo de las mujeres del sur refleja también su liderazgo histórico en la promoción del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en general y en el ámbito de la OEA. Para las mujeres de los Estados Unidos, a pesar de que no podemos esperar su pronta ratificación, la Convención brinda una oportunidad para integrar los derechos humanos en las luchas de las mujeres en el propio Estados Unidos y para fortalecer los lazos con mujeres de todo el continente.

II. AVANCES TEORICOS PERTINENTES A LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

La Convención refleja una conceptualización feminista de la legislación internacional de derechos humanos. En primer lugar, reconoce la gravedad de la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres. Reconoce también la conexión entre la violencia de género y todos los derechos humanos de las mujeres, específicamente el derecho a ser libres de la tortura, el derecho a la no discriminación sexual, y el derecho a ser valoradas y educadas libres de los estereotipos de género y de prácticas culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de las mujeres. Reconoce, además, que la violencia de género puede tomar formas diferentes por razones de raza, etnia, o por ser indígena; por razones de su condición de inmigrante, refugiada, o desplazada; o por razones de embarazo, incapacidad, edad, y condición socio-económica o de estar en situaciones de conflicto armado, en prisión o en otra condición de ser privada de su libertad.

En segundo lugar, esta Convención rechaza la tendencia corriente en la ley internacional que ha permitido la impunidad en la violencia de género oficial y privada en algunos aspectos y rechaza la idea de que los derechos humanos se restringen a lo que hace directamente el estado. En este respecto, la Convención sigue la dirección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha responsabilizado al estado por no haber investigado y

sancionado la violencia política inflingida por los paramilitares, asumiendo que no habían sido dirigidos por el estado. (Caso Velázquez-Rodríguez)² La Convención requiere que los estados investiguen, sancionen y prevengan la violencia privada.

Más allá, ello representa una brecha en la ideología tradicional patriarcal, la cual separa la esfera privada de la pública. El pacto rechaza la idea de que la violencia contra la mujer es una cosa privada. El nuevo pacto condena la violencia inflingida por personas o instituciones privadas, así como la violencia oficial. Eso quiere decir que la violación de una mujer en la cárcel no puede ser vista como una cosa no-estatal o puramente personal, como fue vista históricamente. Y quiere decir que, la violencia inflingida por personas o instituciones privadas es igualmente una violación de la ley internacional. El pacto menciona explícitamente la violencia dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, incluyendo maltrato, violación y abuso sexual. Aborda también la violencia que tiene lugar en la comunidad, incluyendo violación, abuso sexual, tortura, tráfico de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones de educación, de salud, etc. Incluye como agresores a compañeros, maridos, empleadores, maestros, profesores, doctores y otros. La Convención reconoce que la violencia de género obstaculiza la plena realización de las potencialidades de las mujeres y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Por ejemplo, esta Convención es pertinente a la lucha para la salud de las mujeres. El Banco Mundial ha reconocido recientemente que existe una epidemia de violencia de género que es una de las principales causas de daño a la salud de las mujeres. Como fue reconocido en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la salud reproductiva es disminuida y destruida por la violencia de género prohibida por esta Convención. Además, la Convención es aplicable a aquellas prácticas de las instituciones de salud que niegan la integridad física, psicológica y moral de las mujeres. Por ejemplo, se prohíbe el tratamiento o experimentación médica sin la anuencia informada de la mujer. El respeto al cuerpo y a las decisiones de la mujer -a la seguridad de su persona- es la base para la eliminación de la violencia.

La Convención provee un marco amplio para eliminar la violencia de género. Reconoce que las violaciones vienen de la interrelación entre la ley formal, la práctica real, las costumbres y las actitudes, y también las condiciones económicas y sociales, todas las cuales contribuyen a la violencia y perpetúan la subordinación de las mujeres. Por esto, el pacto se refiere concretamente a todos los niveles que perpetúan la violencia de género imponiendo responsabilidades estatales de tres tipos: jurídicas, educativas y positivas, para crear condiciones económicas, sociales y culturales que permitan a las mujeres vivir libres de la violencia. Como se reconoció en la Consulta Interamericana de la CIM que trató la violencia de género³ y como expresa la reconocida experta Alda Facio en su metodología feminista⁴, los niveles diferentes se influyen entre sí y mantienen un sistema que hace trivial e impune a la violencia del género. La violencia no podrá eliminarse mediante el cambio de un sólo factor sin haber involucrado a todos los demás.

Así, según el pacto, los estados tienen responsabilidades de naturaleza negativa y positiva. Los estados deben respetar y garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. El artículo 7 empieza con la responsabilidad de no hacer la violencia del género. Más allá, entiende la responsabilidad jurídica de prevenir la violencia oficial de adoptar las leyes penales y civiles y políticas administrativas «que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer...»; de cambiar sus leyes, políticas, y políticas jurídicas y consuetudinarias -ambos de jure y de facto- que «respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres»; de prevenir que el agresor amenace o haga daño a la mujer; de protegerla; y de dar acceso a las mujeres violentadas a los procedimientos legales y eficaces, incluyendo a aquellas que necesiten para protegerse y compensar el daño causado. Demanda a los estados cambiar tanto la leyes y las políticas formales como el comportamiento de la policía, los fiscales y las cortes. Demanda a los estados adoptar la legislación y demás medidas que sean necesarias para hacer efectiva la Convención.

Mientras que estas últimas responsabilidades son inmediatas, el artículo 8 de la Convención impone responsabilidades progresivas y muy específicas. Los estados tienen que impulsar programas tanto para todo el sistema jurídico, como para la sociedad en general. Enfatiza la necesidad de programas de educación a todo nivel del proceso educativo, para todos los sectores gubernamentales y privados y para los medios de comunicación con la finalidad de eliminar los prejuicios, costumbres y estereotipos que legitiman la violencia de género. Impone la responsabilidad de ayudar a las mujeres a sobrevivir el peligro y los efectos de la violencia y de vivir sin dependencia económica, para proveer servicios y capacitación eficaces. Finalmente los estados deben investigar la incidencia, las causas y las consecuencias de la violencia de género y compartir internacionalmente sus experiencias. El artículo 9 demanda a los Estados el desarrollo de respuestas que tomen en cuenta las circunstancias sociales que aumentan la violencia contra las mujeres.

Lo que hace de esta Convención el instrumento contra la violencia de género más fuerte que hay hasta el

momento son los tres artículos siguientes: el 10, 11 y 12. Ellos contienen los mecanismos regionales de protección que son comparables a los mecanismos que contienen la Convención Americana de Derechos Humanos. La eficacia de estos mecanismos depende de la colaboración -explícita e implícita- entre los/las quienes gobiernan y las mujeres de la ONG que se preocupan de la violencia contra las mujeres en la sociedad civil. Finalmente esto puede ser medido y evaluado por el nivel de conciencia sobre el tema y la forma de vida de todas las mujeres en su vida cotidiana.

III. LOS MECANISMOS DE PROTECCION

1. *Los informes estatales: El papel de la CIM*

El artículo 10 requiere que los Estados que han ratificado el pacto incluyan en sus informes nacionales a la CIM información sobre medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia y para asistir a las mujeres afectadas por la violencia, así como información sobre las dificultades en su aplicación y prevenir la violencia. La responsabilidad de informar abarcan todas las responsabilidades de los estados delineadas en artículos 7 y 8.

Esto da a la CIM una medida muy importante para impulsar las respuestas del estado. En el ámbito internacional de derechos humanos, el proceso de revisión y análisis de los informes nacionales puede ser eficaz, pero depende de lo que hace el comité que los recibe y depende de la actitud del estado hacia los comités. Para hacer eso, la CIM debe desarrollar normas para la preparación de los informes estatales y asegurar que las reformas incluyan medidas educativas, económicas, y sociales así como medidas jurídicas. Desde ya, es importante tener un proceso para evaluar y comentar críticamente a los informes; sino, es una actividad sin sentido. Al mismo tiempo, la CIM puede continuar e impulsar estudios, análisis, conferencias y el desarrollo de criterios para avanzar y analizar las reformas necesarias para poner en práctica la Convención y puede pedir a todos los estados -y no solamente los que han ratificado la Convención- que informen a la CIM bienalmente.

Para fortalecer el proceso de los informes nacionales y la evaluación e intercambio de las estrategias contra la violencia, la CIM debe crear un proceso que impulsa la inclusión de las experiencias, las críticas, y las sugerencias de la ONG pueden realizarse antes y después de la presentación del informe estatal. El informe brinda una oportunidad para consulta entre el gobierno y la comunidad de las ONGs de mujeres, mujeres afectadas y expertas. Además, las ONGs tendrán acceso a los informes de los estados para dar a la CIM sus comentarios y críticas de los informes. El proceso provee una ocasión para impulsar una discusión amplia y pública sobre la problemática y el progreso alcanzado para eliminar la violencia de género.

2. *Opiniones Consultivas: el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*

La Convención también incluye medidas paralelas a las que existen en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 11 da, a los Estados Partes de la Convención y a la CIM, el poder de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opiniones consultivas sobre la interpretación de la Convención. Esto es muy importante porque la Corte tiene el poder de interpretar la Convención y declarar qué es una violación de la Convención y qué es lo que los estados deben de hacer. Por ejemplo, la CIM puede pedir a la Corte una opinión consultiva sobre las leyes y las prácticas que perpetúan la impunidad para la violencia de género como por ejemplo las leyes discriminatorias que exceptúan a las esposas de las protecciones y penalidades corrientes contra la violencia, o las prácticas de policías de no responder a las llamadas de mujeres golpeadas aún existiendo una ley. Además de eso la CIM puede pedir a la Corte una interpretación de la obligación de los estados impuestas por el artículo 8 de adoptar progresivamente medidas específicas. CIM puede intervenir también en casos dirigidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte. Por ejemplo, esa Comisión, tiene algunos casos ahora que demanda el reconocimiento de que la violación es una forma de tortura. Si estos casos van a la Corte, sería apropiado que la CIM intervenga también en este proceso.

3. *El derecho a denunciar: el papel de la Comisión Interamericana de Derechos humanos*

Lo más poderoso es el artículo 12 que da a las mujeres (cualquier persona, grupo, o entidad no-gubernamental reconocida) el derecho, otorgado con relación a otros derechos humanos, a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación, por un Estado Parte, del artículo 7

de la Convención. Según el proceso de la Comisión, dirigida por el artículo 46 de la Convención Americana, se requiere antes de ir a la Comisión, haber agotado los recursos eficaces de la ley interna para brindar al país la oportunidad de corregir el problema. Después, o si no hay un proceso debido o acceso a los remedios o la decisión se demora sin justa razón, una mujer o una organización de mujeres puede denunciar los vacíos y la discriminación en las leyes y la forma de aplicar las leyes en casos particulares o sistemáticamente. Por ejemplo, si no hay leyes contra la violencia o no hay el delito de violación por parte del marido, ello puede ser denunciado. Si no hay medidas en la ley, o si no se usan de igual manera para proteger una mujer contra la violencia se pueden denunciar. También puede ser denunciado el tratamiento que reciben, por parte del sistema jurídico, las mujeres que hayan matado a sus agresores en la defensa de sí mismas.

El artículo 12 incorpora las normas y los requisitos de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos que brindan dos formas de peticiones. La primera forma de petición o comunicación llama la atención sobre las condiciones generales de violaciones de derechos humanos. Tiene la ventaja de poder ser anónima. En respuesta la Comisión de Derechos Humanos puede enviar expertas (os) para investigar los problemas y pueden publicar informes especiales. La segunda forma son las denuncias sobre casos particulares de violencia familiar. La mujer que hace la petición o en cuyo nombre se hace, debe ser identificada para el estado. Siguiendo el proceso detallado en los artículos 48 al 51 de la Convención Americana que brinda al estado la posibilidad de negociar o contestar a la petición, la Comisión puede denunciar la violación y recomendar medidas que el estado debe tener para remediar la violación. Las denuncias se pueden usar para obtener protecciones individuales, incluyendo la compensación, y para impulsar nuevas medidas estatales. La Comisión no puede imponer su voluntad, pero puede crear una presión moral para responsabilizar al estado.

Ambos son instrumentos importantes para llamar la atención a las violaciones de género y para fortalecer a las mujeres. Por ejemplo, estoy participando en una comunicación general hecha por unos grupos de mujeres, haitianas y norteamericanas, quienes estamos protestando por los abusos, especialmente los abusos sexuales de las mujeres ocurridos durante el régimen legal. Cuando ese régimen estuvo en Haití, fue imposible para las mujeres nombrarse en peticiones y por eso fue imposible usar las medidas de denuncia individual. Considerando que la mayoría de abusos sexuales ocurren en las casas de las mujeres no en las cárceles, hacer una petición aumenta el peligro para las mujeres. Además existe el sentido de vergüenza y culpabilidad tradicional de la mujer violada. No obstante todo eso, hay mujeres que quieren denunciar la violación como una violación atroz de derecho humanos.

Así, la posibilidad de denunciar violaciones a la Comisión es un instrumento potencialmente fuerte para cambiar la política y la cultura. Las mujeres pueden construir campañas estatales y regionales contra la violencia. La petición puede concretizar la violencia de género, dar forma humana a algo que es sistemático en nuestras sociedades y visualizar las violencias toleradas. La posibilidad de peticiones de países diferentes enfatizan lo común en la violencia de género. La posibilidad de una petición puede impulsar cambios de política antes de involucrar la Comisión, o el Estado puede responder positivamente, éticamente al proceso o al informe de la Comisión. Si las violaciones continúan, la Asamblea de la OEA puede responder al informe de la Comisión.

Hay una dimensión muy íntima y muy fuerte donde funciona el derecho a denunciar a la violencia de género. El caso de Haití ilustra la conexión estrecha entre las medidas formales y las transformaciones individuales. Por parte formal de la ley, impulsa el reconocimiento que la violencia es una forma paradigmática de la tortura; por otra, la condenación fuerte y oficial avanza la concientización y la rehabilitación de las mujeres violadas y contribuye a disminuir el sentido de vergüenza y la marginalización histórica que la trae aparejada la violencia sexual. La Convención brinda la oportunidad de avanzar en la condena y en el potenciar a las mujeres frente a la violencia de género. Como ha dicho Teresa Rodríguez, Coordinadora del Programa Contra la Violencia de Isis Internacional: «Esperamos que este importante instrumento internacional sea acogido y aplicado internamente en nuestros países y también contribuya al desarrollo de mecanismos en otras regiones y así iniciamos el siglo 21 libre de la violencia en las familias y las sociedades».

No obstante, la Convención contiene tres limitaciones significantes relacionados con el derecho de denunciar a individuales por medio del artículo 12. Desafortunadamente, la Convención no da la posibilidad de denunciar ante la Comisión Interamericana las faltas de carácter educativo o positivo que forman parte de las responsabilidades estatales de acuerdo al artículo 8. Refleja la división grave y problemática entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque es más difícil concretizar en el ámbito de derecho económicos, sociales y culturales, no es imposible. No obstante, como se ha discutido ya, las responsabilidades señaladas en el artículo 7 de garantizar el derecho de vivir libre de la violencia de género incluyen explícitamente todas las medidas que sean necesaria para eliminar la violencia. Dado que la violencia es una cosa de causas y consecuencias muy numerosas y complejas, es posible denunciar la falta de capacitación, educación frente a

la Comisión. Así, hay algunas posibilidades de usar el artículo 7 de una manera más amplia. En el fondo, es el protagonismo político de las mujeres y los hombres que les apoyan, lo que puede incidir en que hayan medidas más amplias y transformativas. Y esta falta no elimina la responsabilidad de implementar todas sus obligaciones: quiere decir, solamente, que no puede disputar sus acciones o sus omisiones. También, hay el requisito de los informes estatales a la CIM para impulsar los estados a efectuar el cambio progresivamente.

En segundo lugar, la posibilidad -sujeto al acuerdo del estado- que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede referir casos a la Corte Interamericana fue eliminada. Eso quiere decir que solamente un estado simpático a las mujeres y la CIM puede involucrar a la Corte para solicitar una opinión consultativa. Según esta Convención, la Corte no tiene jurisdicción de revisar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como tiene sobre la Convención Americana. Sin embargo, eso no es un problema tan serio porque la Convención Americana se aplica y da esta jurisdicción en casi todos los casos.

En tercer lugar, la Convención sólo responsabiliza al estado cuando no sancione o prevenga adecuadamente la violencia privada. Los mecanismos regionales de la Convención no se aplican en forma directa a los agresores. Sin embargo, la Convención, junto con la condena de la violencia contra las mujeres en otros instrumentos, declaraciones, y acciones internacionales⁵, contribuirá a crear en la ley internacional acostumbrada, a la jurisdicción universal para casos de violencia de género. Al mismo tiempo, el reconocimiento que la violencia de género es, en muchos casos, una forma de la tortura provee la base para la jurisdicción universal. La jurisdicción universal quiere decir que, para los que quieren tratar de evitar la penalización interna, cada estado tiene la obligación de sancionar los agresores individualmente en sus cortes o a mandarlos a otra corte apropiada, no obstante que el crimen no haya ocurrido en su país. Además, el reconocimiento de que la violencia de género es una violación de derechos humanos, permite denuncias civiles en países que incorporan la ley internacional en su ley interna.

Finalmente, es importante reconocer que esta Convención contra la violencia de género es totalmente consistente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En mi opinión, la Convención Americana debe ser interpretada para incluir el derecho a vivir libre de la violencia de género. La Corte de Derechos Humanos ha establecido el principio de la responsabilidad del estado cuando tolera las violaciones privadas. El principio es lo mismo aquí. Lo que contribuye esta Convención es el énfasis sobre la violencia de género y la especificación de medidas específicas para implementarla. Constituye una interpretación desde la perspectiva de género de las protecciones contra la tortura y el tratamiento cruel e inhumano y degradante, y de la seguridad de la persona, así como la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer interpreta en más detalle lo que quiere decir el derecho de no ser discriminada por razón de sexo. Así, podría decir que la Convención se aplique a todos los estados ya sea ratificado o no por ellos.

Esto ilustra el principio muy importante enunciado en la reciente Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En la Declaración de Viena los estados se han comprometido a dos caminos para avanzar los derechos humanos de las mujeres. Primero, el deber de crear nuevas instituciones y mecanismos enfocados a los derechos de las mujeres. Esta Convención contra la violencia de género y las responsabilidades de la CIM lo ilustra. Segundo, se debe integrar la perspectiva de género en todo el funcionamiento del sistema de derechos humanos en todos los niveles⁶. Esto quiere decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de examinar la violencia de género en todos los informes y los procesos que autoriza la Convención Americana tal como lo autoriza la nueva Convención. Quiere decir también que la corte puede examinar casos de la violencia de género sobre esta Convención no obstante la falta de una disposición específica.

Más allá, para evitar la marginalización del tema de género, el primer encuentro de expertas y cada grupo que lo siguió dieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la jurisdicción sobre las denuncias con la finalidad de no crear otro mecanismo especial. A mi juicio, eso debe estar acompañado por la integración de las mujeres como miembros de la Comisión y la Corte. Al presente, no hay ninguna mujer comisionada ni juez en los mecanismos de protección. Es necesario que los estados interamericanos se comprometan inmediatamente a nominar y elegir mujeres expertas en los derechos humanos así como en la perspectiva de género, a estos cuerpos. Si no, los cuerpos de las mujeres no serán plenamente protegidos y las voces de las mujeres no serán escuchadas en los procesos para universalizar los derechos humanos.

De todos modos, la Convención podría ser un instrumento fuerte para terminar con la impunidad y avanzar en el derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de la violencia y plenamente partícipes de los derechos universales y en sus sociedades. El principio reconocido - que las mujeres tienen el derecho a vivir libres de la violencia de género- tiene la potencialidad de transformar la vida de las mujeres y la sociedad entera. Este principio está ligado a las responsabilidades concretas de los estados y a los mecanismos supranacionales de ejecución.

Es importante que impulsemos la ratificación de la Convención junto con las reformas de la ley interna

que concretizan las responsabilidades estatales. Y más allá, es importante que utilicemos la Convención para construir un nuevo mundo respetuoso hacia las mujeres y democrático en cada esfera. Esperemos que algunas de nosotras sobrevivamos hasta el momento en el cual podamos decir tanto en cuanto a una violencia de género así como a una violencia dictatorial: «NUNCA MAS».

Nota:

* Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Vicepresidenta del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York.

¹ Organización de las Naciones Unidas, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración de Viena y Programa de Acción (A/Conf/157/24, 13 de octubre de 1993). En adelante, la Declaración de Viena, párrs.18,36-44.

² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez-Rodríguez, 28 I.L.M.294 (1989).

³ Comisión Interamericana de Mujeres, Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia, Washington, D.C., 1990.

⁴ Alda Facio Montejó, Cuando el género suena cambios trae: Metodología para el análisis de género del fenómeno legal (ILANUD, Proyecto Mujer y Justicia Penal, 1992).

⁵ Por ejemplo, la recomendación N° 19, Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, XI, período de sesiones, documento de las Naciones Unidas: A/47/38; CEDAW/C/1992/L. 1/Add.15 (1992); Declaración de Viena; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 104 del 48° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU; Sup. N° 49, A/48/49 (1993); Programa de Acción de Cairo, Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo; Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993), S/25764 (3 de mayo de 1993) que contiene el Estatuto del Tribunal Internacional sobre Crímenes en la ex-Yugoslavia.

⁶ Declaración de Viena, párrs, 18, 36, 37, 40 y 42.